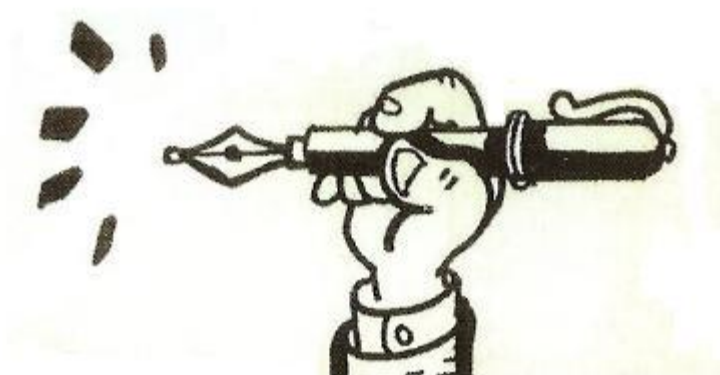


Dossier de Presentación

I Concurso Internacional de Humor Gráfico sobre Justicia Transicional en el Mediterráneo: Marruecos, Argelia y España



Organizan:

Con el apoyo de:



¿Qué encontraras en éste dossier?

- Presentación del Concurso
- Contexto en que se sitúa el Concurso
- Dimensión en que es sitúa el Concurso
- Otras informaciones prácticas

Presentación del Concurso

Elcàlam-Comité de defensa de los derechos humanos en el Magreb y Alliance for Freedom and Dignity (AFD) organizan, con la colaboración de ACSUR-Las Segovias y Sodepau, y con el apoyo de la Oficina de Promoción de la Paz y de los Derechos Humanos de la Generalitat de Catalunya, el **Primer Concurso Internacional de Humor Gráfico sobre justicia transicional en el Mediterráneo**, que tiene como protagonistas de esta primera edición en **España, Argelia y Marruecos**.

Tres territorios cercanos unidos por el dolor pero también por la lucha. Tres territorios que desde experiencias históricas diferentes han sufrido conflictos violentos, la represión, la negación de la verdad, y la impunidad de los culpables de tanto dolor. Tres territorios donde hombres y mujeres de muy diferente condición trabajan, en condiciones a veces muy adversas, para recuperar la justicia, la verdad y la dignidad.

Los procesos de justicia, verdad y reparación después de periodos de transición de un estado de guerra a la paz o el paso de una dictadura a la democracia han sido y son difíciles, y de su modalidad y éxito dependen las posibilidades de construir y consolidar una verdadera democracia.

El concurso tiene entre sus principales objetivos sensibilizar a la ciudadanía sobre la situación de los derechos humanos en el Magrib, y más concretamente sensibilizar, difundir y denunciar las circunstancias que rodean los procesos de investigación de la verdad y de recuperación de la memoria histórica.

¡Os invitamos a participar!

Para más información: <http://concurs-humorgrafic-barcelona09.tk/>
concurs@elcalam.info

Contexto en que se sitúa el Concurso

La **sátira política** desde la expresión gráfica es un ejercicio que si bien en algunos territorios del globo puede parecer algo normal, en muchos países es una práctica en algunos casos difíciles y en otros prohibida o perseguida.

Con el proyecto que se presenta, se quiere contribuir en la adopción de iniciativas necesarias para el reconocimiento y la rehabilitación de todos los ciudadanos y ciudadanas que han sufrido persecución como consecuencia de la defensa de la democracia y que trabajan **para la recuperación de la memoria de las víctimas de las dictaduras y las guerras civiles** promoviendo una transformación justa y positiva de los conflictos **desde el humor**, pero también desde una vertiente más académica.

La restitución de la memoria histórica tiene que reflejar la pluralidad de memorias desde las perspectivas ideológicas, de conciencia, sociales, culturales y nacionales. Mediante la actividad se quiere transmitir que la tarea de recuperación de la memoria histórica tiene que ser entendida como una oportunidad de investigar la historia colectiva con la finalidad de difundir entre las generaciones presentes y futuras el respeto **por los derechos humanos** y el conocimiento del funcionamiento de los fundamentos del sistema de libertades.

Los procesos de Justicia Transicional tienen variantes. El punto de partida es cómo afrontar estas transiciones posbélicas o de dictaduras a regímenes democráticos. Los vectores de la Justicia Transicional y de la Recuperación de la Memoria son la Verdad, la Reparación y la Justicia: **qué ha pasado, dónde están los muertos y quién lo ha hecho**. Tal como se señala en el Preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la paz y la justicia son conceptos que están relacionados significativamente.

En los procesos de recuperación de la memoria, la justicia tiene que comprometerse mediante la función de la Ley a no aplicar amnistías generalizadas y tiene que garantizar que se pueden rendir cuentas. Sin un respeto efectivo de los derechos humanos no hay paz justa y duradera. Y los procesos de paz necesitan de voluntad e imaginación política, en el marco de un proyecto siempre en construcción. Sin tener en cuenta las instituciones que construyen las herramientas para superar el pasado de una forma positiva, tales como las Naciones Unidas y otros organismos internacionales o nacionales, no es posible asegurar la paz ni la garantía del respeto a los Derechos Humanos.

En definitiva, el proyecto, a través del humor gráfico, quiere conseguir una muestra crítica de las prácticas derivadas de los procesos de Justicia Transicional - **el esclarecimiento de los hechos sucedidos al pasado** (comisiones de la verdad, mecanismos de investigación extrajudicial de composición pluralista) **y el derecho a la Justicia** (al recurso efectivo de la justicia): sanción y castigo; reparación, depuración o lustramiento (limpieza burocrática de los cuadros del antiguo régimen); **reconciliación o construcción de confianza entre las partes enfrentadas**- y con las dificultades con que se encuentran las sociedades tales como la española, la marroquí y la argelina al querer desarrollar procesos en esta dirección.

Es por eso que **se celebrará un Foro de Debate abierto** a todo el mundo sobre esta temática.

Dimensión en que se sitúa el Concurso

Marruecos y Argelia son países muy cercanos a nosotros, con los que nos unen importantes vínculos de carácter geográfico, histórico y humano, y con los que mantenemos relaciones muy estrechas. En estos países los parlamentos que surgen de las urnas tienen un escaso o

nulo papel por el dominio de la monarquía y el Ejército, que concentran, respectivamente, la mayor parte del poder.

En estos países la tortura se sigue practicando, y muchas de estas personas son mantenidas en régimen de incomunicación de forma indefinida. Además hay alegaciones de que funcionan cárceles secretas en las que se interrogan prisioneros, presuntamente vinculados con el terrorismo internacional, en colaboración con los servicios secretos de Estados Unidos de América. Todos estos hechos no son investigados posteriormente.

Por otra parte, la prensa ha sufrido importantes tropiezos los últimos años. Las leyes de prensa prevén penas de prisión para periodistas por sus opiniones, y la prensa independiente sufre la persecución de las autoridades mediante instrumentos muy variados. En estos países la justicia está fuertemente instrumentalizada por los poderes políticos y no es independiente.

Tanto Argelia, el Marruecos como España han sufrido las graves consecuencias de regímenes dictatoriales que hicieron o hacen uso de la represión como instrumento de subyugación y control de sus ciudadanos.

Reino de Marruecos

En Marruecos, durante los temibles años de plomo -especialmente de los años sesenta a los ochenta, correspondientes a gran parte del reinado de Hasan II- desaparecieron miles de personas (la mayor parte de ellos militantes saharauí, pero también opositores políticos), se construyeron y utilizaron centros de detención secretos (Tazmamart o Qualat M'guna) y se practicó la tortura de forma sistemática. Aunque durante la última década del mandato de Hasan II, en los años noventa, la represión se suavizó; bajo el actual régimen autocrático de Mohamed VI perviven las violaciones de los derechos humanos: la práctica de torturas, las desapariciones temporales, o las trabas a la libertad de expresión, de asociación o de prensa. En Marruecos existe una voluntad política manifiesta de reprimir.

Los principales sectores objeto de la represión a los años de plomo fueron la población del Sahara Occidental, los grupos políticos que apoyaban la autodeterminación del territorio, los militares vinculados con los diferentes golpes de estado, los sectores republicanos y los partidos de oposición, especialmente los de izquierda y los militantes del Islam político. Con la evolución de la situación política, la represión se centra actualmente sobre todo en los militantes saharauíes, los sectores de la extrema izquierda, los militantes y simpatizantes con el Islam político, y los miembros de movimientos como el amazigh o los diplomados en desempleo.

En Marruecos se dio un paso adelante con la creación el 7 de enero de 2004 de la Instancia Equidad y Reconciliación (IER) por el rey Mohamed VI cuyo objetivo era investigar las violaciones de los derechos humanos cometidos desde la independencia del país en 1956 hasta 1999 (fecha en la que llegó al poder el actual monarca); concretamente: establecer la naturaleza y escala de las violaciones graves de los derechos humanos teniendo en cuenta el contexto en que se produjeron; continuar trabajos anteriores de investigación sobre los desaparecidos; determinar las responsabilidades de los órganos oficiales o de otras partes; trabajar sobre la reparación de las víctimas; redactar un informe con conclusiones y recomendaciones; y por último, desarrollar y promover una cultura de diálogo y fijar las bases del proceso de reconciliación nacional. El 30 de noviembre de 2005 el IER entregó su informe final al soberano y daba por finalizado su trabajo.

Si bien la creación del IER se puede valorar positivamente por diversos aspectos: su experiencia constituye una primicia en el mundo árabe; ha dado voz a las víctimas, al

padecimiento de varias generaciones que sufrieron en silencio los atropellos de un régimen autocrático; ha tenido una dimensión simbólica, educativa y pedagógica relevando (especialmente gracias a la celebración de 7 audiciones públicas en seis regiones del país, y la retransmisión por televisión de los testimonios de algunas víctimas previamente escogidas); ha permitido avanzar en el establecimiento de la verdad (un total de 742 casos de desaparecidos han sido presuntamente aclarados, y se han señalado otros 66 sobre los que el Estado tendría que seguir investigando; además ha instruido y tomado decisiones en relación con la necesidad de reparación sobre 16.861 casos); su trabajo padece de importantes carencias. Entre las principales hay que destacar:

La Instancia es una institución de carácter consultivo que fue convocada por el rey con un mandato consensuado con Palacio. Su tarea tiene un carácter extrajudicial. Además queda totalmente excluida la publicación o la alusión pública de los nombres de los responsables de las violaciones de los derechos humanos y no se prevé ningún mecanismo para juzgar a estas personas.

En muchas cuestiones sus conclusiones son claramente insuficientes e incluso equívocas, como en el caso de las desapariciones forzadas de saharauis, del esclarecimiento de los acontecimientos en el Rif, de la represión de las manifestaciones de Casablanca el año 1981, etc. Asimismo, la IER tampoco ha sido capaz de aclarar las circunstancias de algunos casos especialmente emblemáticos, como el de la desaparición y asesinato del dirigente socialista Mehdi Ben Barka el año 1965.

El hecho que las investigaciones se detienen en el año 1999, supone que no se sigan investigando las violaciones de los Derechos Humanos que continúan sucediéndose.

República Democrática Popular de Argelia

En Argelia, la cruenta guerra fratricida que se inició después del golpe de estado de 1992 provocó cientos de miles de muertes, muchas de ellas en manos de los cuerpos de seguridad. Después del fin de la guerra se siguen produciendo centenares de asesinatos políticos cada año en manos de grupos armados todavía activos o de las fuerzas del orden. El ejército controla, desde la Independencia y a la sombra, los resortes de la vida política, social y económica del país. Hoy en día más de 8.000 personas están desaparecidas y el gobierno no ha dado explicaciones fiables sobre su paradero.

El decreto de amnistía de 27 de febrero de 2006 “Decreto de aplicación de la Carta por la Paz y la Reconciliación Nacional” otorga una amnistía general a las milicias y fuerzas armadas que participaron en la guerra sin que se haya previsto ningún tipo de investigación. Asimismo amplía las amnistías anteriores otorgadas a los miembros de los grupos armados que dejen las armas, siempre que no estén implicados en masacres colectivas, violaciones o el uso de explosivos en lugares públicos. La práctica seguida hasta ahora demuestra que estas posibilidades no se investigan.

El artículo 46 del Decreto de 2006 prevé penas de hasta 5 años y multas de hasta 500.000 dinares para aquellos que «quieran explotar a las heridas de la Tragedia Nacional», ensuciar la imagen de Argelia o la buena reputación de sus agentes. De esta manera se coarta de forma grave la libertad de expresión y con el objetivo de impedir que las familias de los desaparecidos sigan luchando para conocer la verdad de lo que sucedió a sus familiares, mientras se aleja la posibilidad de interponer denuncias contra las fuerzas de seguridad. Estas medidas están contra el derecho internacional que propugna la justicia y el conocimiento de la verdad y la paz. Este decreto se presenta como la materialización de la Carta por la Paz, aprobada en referéndum, no transparente, el 29 de septiembre de 2005,

pero que no mencionaba expresamente la posibilidad de amnistía para las fuerzas del orden. Culmina de esta manera el proceso iniciado con anteriores iniciativas políticas (como la ley de Clemencia *Rahma* promovida por el presidente Liamín Zerual en 1997.

En cuanto a la situación de los desaparecidos y la demanda de justicia por las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la guerra civil, el 31 de marzo de 2005 el presidente de la Comisión Nacional Consultiva de Promoción y de Protección de los Derechos Humanos, creada por decreto presidencial en marzo de 2001, entrega al presidente Abdelaziz Buteflika un informe en el que se identifican 6.146 casos de desaparecidos en manos de los cuerpos de seguridad del Estado. Esta cifra se aleja de los 8.000 casos reseñados por las asociaciones de familias o de los entre 15.000 y 20.000 por la Liga Argelina por la Defensa de los Derechos Humanos. Después de la presentación del informe la estrategia seguida por las autoridades es considerar estos secuestros como casos aislados, ya juzgados (a pesar de ningún agente ha estado inculcado por casos de desapariciones, sólo por abusos) y sin implicación de los altos mandos.

Las principales asociaciones de defensa de los derechos humanos y de familiares de desaparecidos critican el texto de la Carta, así como sus precedentes, por el hecho de imponer la impunidad y negar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Desde el golpe de estado de 1992 persiste el estado de excepción. Aunque la intensidad de la violencia estatal ha disminuido desde comienzos del 2000, muchos informes hablan de casos de tortura y maltratos cometidos contra prisioneros de todo tipo. La «Seguridad Militar» -nombre con lo que se conoce al Departamento de Información y Seguridad (DRS)-, perteneciente a las fuerzas armadas, es la principal responsable de la lucha antiterrorista y a la que se atribuye buena parte de la represión. Algunos de los principales responsables de la represión durante el conflicto civil siguen ocupando altos cargo, como el general Mohamed Médiène, que continúa dirigiendo la DRS.

Argelia ha celebrado elecciones presidenciales el año 2009 -después de una modificación de la Constitución que permite la perpetuación al poder del Presidente Bouteflika- y Bouteflika ha ganado con uno «sorprendente» 90'24% de los votos a favor, resultados de que son «muy difíciles de conseguir» en cualquier democracia, para no decir imposible.

Catalunya y España

España es actualmente el país con un mayor número de casos de desaparición forzosa denunciados ante los tribunales. Los sucesivos gobiernos españoles no han cumplido con sus obligaciones internacionales y las víctimas llevan años enfrentándose con múltiples obstáculos para obtener la verdad y una justa reparación. Una de las principales dificultades es la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977 y el no reconocimiento formal de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, tal como denuncia el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en sus observaciones finales, hechas públicas el pasado 31 de octubre de 2008, al quinto informe periódico de España como Estado parte en el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos. Entre las recomendaciones del Comité se encuentra también la creación de una Consejo independiente que establezca la verdad histórica sobre violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil y el franquismo, y que garantice la localización, exhumación e identificación de los restos de las víctimas, y su restitución a los familiares.

El pleno de la Audiencia Nacional acordó paralizar la apertura de las fosas de la guerra civil ordenada por el juez Baltasar Garzón, que se declaró competente para investigar los crímenes cometidos durante el franquismo. De esta manera se da la situación paradójica

que mientras los tribunales españoles han asumido su competencia para investigar y perseguir los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en otros países –a pesar que ya haya sido limitado- (Argentina, Chile, Marruecos, etc.), sosteniendo a sus causas que las leyes de amnistía, así como cualquier otra medida análoga carecen de validez a España, se abstienen de investigar crímenes similares cometidos en el propio país.

La Ley 52/2007 de la Memoria Histórica es a todas luces insuficiente, y a pesar de se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de aquellos que sufrieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, el texto no hace referencia a las normas internacionales a las que está sometido el estado español y traslada a la familia de las víctimas la tarea, los costes y las responsabilidades de sus iniciativas.

Esta Ley, aprobada por el Congreso de los Diputados el 21 de octubre de 2007, parte del texto del proyecto de ley previamente aprobado por el Consejo de Ministros el día 28 de julio de 2006, siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero, por el cual se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de aquellas personas que sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Incluye el reconocimiento de todas las víctimas de la Guerra Civil, las víctimas de la dictadura, la apertura de fosas comunes en las que todavía se encuentran los restos de represaliados que se sublevaron durante la Guerra Civil, tareas hasta entonces realizadas desde entidades privadas -como la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y el Foro por la Memoria- o comunidades autónomas a la espera de subvenciones estatales, o la retirada de la simbología franquista de las vías públicas.

El año 2006 tuvo lugar la aprobación del Estatut de Autonomía de Catalunya, el artículo 54.1 del cual establece que la Generalitat y los otros poderes públicos de Catalunya tienen que velar por el conocimiento y el mantenimiento de la memoria histórica de Catalunya como patrimonio colectivo que testimonia la resistencia y la lucha por los derechos y las libertades democráticas. Con esta finalidad, se tienen que adoptar las iniciativas institucionales necesarias para el reconocimiento y la rehabilitación de todos los ciudadanos que han sufrido persecución como consecuencia de la defensa de la democracia y el autogobierno de Catalunya.

La aprobación por el Parlamento de Catalunya de la Ley 13/2007, de 31 de octubre, del Memorial Democrático, conlleva que la Generalitat tiene ahora un instrumento para llevar a cabo políticas públicas destinadas a recuperar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y de las personas, las organizaciones y las instituciones que hicieron frente a la represión política, social, cultural y nacional de un régimen ignominioso. La creación del Memorial Democrático es un paso adelante fundamental para avanzar hacia el objetivo de recuperar, conservar y proclamar la memoria democrática como patrimonio colectivo y, por lo tanto, fomentar los valores, en los cuales se basa la convivencia democrática de la sociedad catalana actual.

Desde enero de 2003 la Generalitat de Catalunya asume la investigación, a demanda de familiares de las personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo. Catalunya es la única comunidad del Estado que ofrece este servicio. Al solicitar la búsqueda de la persona desaparecida, su nombre y sus datos conocidos se incorporan al Censo que la Generalitat creó. Con respecto a las fosas comunes de Catalunya, se informa a particulares, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro y administraciones diversas sobre todo aquello de que hace referencia a las fosas.